

POLICÍA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

Jefatura Jurídica

RESOLUCIÓN Nº 5 /

SANTIAGO, 22.DIC.2010.

VISTOS:

- a) El principio de probidad administrativa y de Transparencia en los actos de la Administración del Estado, establecido en el artículo 8º de la Constitución Política de la República.
- b) La Carta de Derechos Fundamentales garantizados por el Estado, contenida en el artículo 19 de la Carta Fundamental.
- c) La disposición Cuarta Transitoria de la Constitución Política de la República.
- d) Ley 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública y la regulación que contempla en el ejercicio del derecho de acceder a la información pública.
- e) El Decreto Supremo Nº 13 de fecha 02.MAR.2009 que establece el Reglamento de la Ley 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública.
- f) La solicitud presentada por don **Felipe PLAZA PAEZ** ingresada bajo el folio Nº **AD010C-0000264**, en la que solicita acceso a la información respecto a: 1.-Número de denuncias que se presentaron en las unidades policiales de las comunas de Providencia, Ñuñoa y La Reina, en el periodo que media entre el año 2008 y el mes de octubre de 2010. 2.-Número de tales denuncias que se recibieron por delitos en contra de la propiedad, del robo de vehículos motorizados y de no motorizados. 3.-Lugares Geográficos (direcciones, zonas o cuadrantes que permitan determinar los lugares peligrosos de las zonas solicitadas) en los cuales ocurren las denuncias del punto 2 de su solicitud. 4.-Número de funcionarios que prestan servicios en las comunas de Providencia Ñuñoa y La Reina, desglosados por comunas, con la finalidad de determinar cuantos policías hay por habitantes en las citadas zonas. 5.-Número de vehículos para acudir a los procedimientos, helicópteros (sólo los destinados a la zona indicada) y equipo en general, que presta servicio en las comunas de Providencia Ñuñoa y La Reina.

CONSIDERANDO:

1. Que, conforme lo dispone el artículo 8º de la Constitución Política los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son públicos y sólo una ley de quorum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquellos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.
2. Que, el artículo 11 de la ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública consagra los principios en los que se ampara el derecho de acceso a la información pública, entre los cuales destaca aquel contenido en la letra e) denominado de la "divisibilidad", en virtud del cual se puede negar lugar a parte de la información solicitada y acceder a la otra.
3. En atención a la solicitud de acceso a la información presentada ante este servicio público, se le aplicará el principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley 20.285, ya citada, refiriéndose, la presente resolución, a aquellos antecedentes relativos a la dotación: 4.-Número de

funcionarios que prestan servicios en las comunas de Providencia, Ñuñoa y La Reina, desglosados por comunas, con la finalidad de determinar cuantos policías hay por habitantes en las citadas zonas. y 5.- Número de vehículos para acudir a los procedimientos, helicópteros (sólo los destinados a la zona indicada) y equipo en general, que presta servicio en las comunas de Providencia Ñuñoa y La Reina” requerido.

4. El artículo 21 N° 2 de la Ley 20.285, ya citada, consagra que el servicio público podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico.

Al respecto, la petición de información sobre la dotación de las comunas Providencia, Ñuñoa y La Reina equivale a conocer con cuanto personal la Institución cumple sus cometidos en cada unidad policial indicada en la Región Metropolitana.

La ley de plantas de la Policía de Investigaciones de Chile N° 19.586 y la que incorporó el escalafón de Oficiales Policiales Profesionales la Ley N° 20.113 fijaron la dotación de planta de la Institución, por lo que la cantidad de funcionarios policiales que hay por cada habitante, se puede obtener de esos antecedentes, considerando que corresponden a 27 Brigadas de Investigación Criminal divididas por comuna y a 4 Prefecturas en la Región Metropolitana, todas unidades dependientes de la Región Policial Metropolitana

Ahora bien, entregar el número exacto de funcionarios por unidad policial, por cierto afecta la seguridad del cuartel policial, y en consecuencia, la seguridad personal de los funcionarios policiales que en tales unidades prestan sus funciones, del siguiente modo: si la información se hace pública, se conoce con anticipación la capacidad de reacción policial frente. En tal sentido, para lograr el rescate de un delincuente detenido en una unidad policial, por parte de sus conocidos, bastaría con agregar más personas al grupo participante, dado que se conoce el número de funcionarios policiales que podrían contrarrestar el ataque, afectando con ello la integridad física de los funcionarios, exponiendo en forma injustificada incluso su derecho a la vida.

La causal invocada implica reconocer que la publicidad de la información de este servicio público, en cuanto al número de personal por brigada, afecta la seguridad de las personas en este caso de los funcionarios de la PDI, quienes no han perdido sus garantías personales en cuanto personas que son, por la sola circunstancia de actuar como agentes del Estado, por lo que su seguridad, su integridad física e inclusive su vida, se pone en riesgo en los términos explicitados.

5. Por otra parte, el artículo 21 N° 3 de la ley 20.285 ya mencionada consagra que el servicio público podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la Nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden público o la seguridad pública. La norma consagra la publicidad como regla general de los actos administrativos, y que las excepciones a esa regla, además de reunir el requisito de encontrarse en ley de quórum calificado, se refiera a la afectación de: debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.

Por su parte las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública establecidas en el artículo 101 de la Carta Fundamental, que están compuestas por Carabineros e Investigaciones, conforme al texto citado existen para **dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior** en las forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas.

Como una aproximación de definición de orden público podemos indicar la siguiente: “estado de paz de la colectividad nacional resultante de la protección del Estado contra las diferentes amenazas que pudieran afentar contra la seguridad, tranquilidad, moralidad e higiene de sus habitantes” (Luis Orellana Reyes. “Orden Público, Su conservación y protección. Memoria de Prueba U. de Concepción 1993).

Del concepto señalado podemos reconocer que el Estado debe proveer a ese estado de paz mediante la actuación de los organismos públicos pertinentes, tendientes a evitar todo hecho que amenace o que atente contra la seguridad, tranquilidad, etc. de la sociedad.

De esta manera, la divulgación de información relativa a la dotación de las comunas Providencia, Ñuñoa y La Reina y del número de vehículos para acudir a los procedimientos, helicópteros (sólo los destinados a la zona indicada) y equipo en general, que presta servicio en las comunas de Providencia Ñuñoa y La Reina, permite a los delincuentes actuar sobre seguro y anticipar la misión de la Policía de Investigaciones afectándola en cuanto a su función pública y atentando contra el orden público y la seguridad pública interior, bienes que el Estado está encargado de garantizar a sus ciudadanos.

Ello a la luz de la definición de seguridad pública entendida como una necesidad de las personas que integran la sociedad, para desarrollarse plenamente como tales, viviendo en armonía con los demás, respetando los derechos individuales del otro, nos permite concluir que para que esta necesidad se satisfaga, es el Estado el ente encargado de brindarlo como un servicio que garantiza la integridad física de las personas y de sus bienes como garante de que esa necesidad se cumpla o satisfaga, el que debe destinar sus actuaciones a evitar toda alteración del orden social, que ponga en riesgo la seguridad de la sociedad.

En este concepto la Policía de Investigaciones de Chile, tiene el rol no sólo de investigar hechos constitutivos de delitos, sino que de llevar una labor de prevención, con lo cual impide que la amenaza atentatoria de ese estado de paz (orden público) y de armonía, se produzca para que las personas integrantes de la sociedad se desarrollen en plenitud (seguridad pública).

En virtud de lo anterior, en el ámbito de la seguridad pública, la labor de la Policía de Investigaciones está dirigida a la indagación de los delitos conforme a las instrucciones impartidas por el Ministerio Público; prevenir la perpetración de hechos delictuosos y actos atentatorios contra la estabilidad de los organismos fundamentales del Estado; cumplir con las órdenes de las autoridades judiciales con competencia en lo criminal; de las autoridades administrativas cuando intervienen como tribunal especial, y otras que le encomienden expresamente las leyes, conforme lo ordenan los artículos 4º y 5º de la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones Decreto Ley Nº 2460.

De acuerdo a lo expuesto la seguridad pública, que resulta de interés nacional, involucra que las funciones y mandatos indicados precedentemente se cumplan a cabalidad por parte de la Policía de Investigaciones, lo que en otras palabras significa: que la entrega de la información solicitada, afecte la capacidad de respuesta frente a atentados a cuarteles policiales, como por ejemplo, el atentado al cuartel de la Brigada de Homicidios por parte de encapuchados en el año 2009, con el consecuente enfrentamiento, resultando además de varios oficiales heridos, la afectación del orden público en la agresión a un organismo del Estado, y la seguridad de las personas que viven en el sector, quienes viven en un entorno tranquilo, en donde por esos hechos se les alteró su armonía con evidentes posibilidades de resultar heridas por el intercambio de balazos y/o por las bombas del tipo "Molotov" que se lanzaron.

En otro ejemplo, un operativo como el que se llevó a cabo en la Población La Legua, en Junio del año 2010, esto es con la "simulación de un funeral", que significó la detención de numerosas personas dedicadas a la comercialización ilícita de drogas, la incautación de armas y sustancias estupefacientes, además de la "astucia" de la operación, requiere de numeroso personal que participe, involucrando a distintas unidades policiales de la Región Metropolitana, que se puede frustrar por conocerse con anticipación el número de funcionarios por unidad, por parte de las organizaciones criminales, al saberse con que potencial humano la PDI puede actuar.

Lo anterior se traduce en el siguiente ejercicio, basta con hacer un cálculo de los miembros integrantes de la unidad y de contar con la información del material policial, para obtener como resultado la capacidad de respuesta de la PDI en el operativo.

6. La Policía de Investigaciones como organismo de la Administración Pública al servicio y por ende en constante contacto con el público, pero también lo hace con los criminales y con el crimen, por lo que las consideraciones expuestas, obedecen a situaciones que se desarrollan diariamente, dado que las alteraciones del orden público, no son excepcionales.

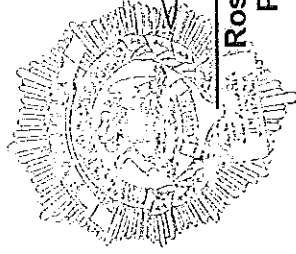
Cabe recordar que los resultados de las actividades policiales de este organismo se revisan diariamente ante los Tribunales de Garantía, cuando intervienen en las audiencias de control de la detención, de las personas que fueron privadas de libertad por personal institucional, por lo que en ese sentido esta Institución está permanente y constantemente en revisión de sus procesos policiales por parte de las autoridades judiciales, como también por parte de la Contraloría General de la República, como órgano que forma parte de la Administración del Estado.


Por otro lado, en cumplimiento del mandato constitucional de dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, la Policía de Investigaciones de Chile realiza y realizará todas las actuaciones que por ley se le autorizan, lo cual no se reduce sólo a la detención de las personas respecto de las cuales se hubiera despachado una orden de aprehensión, sino que en términos generales es la de brindar protección a aquellos derechos garantizados por la Constitución Política a las personas, hacer respetar el orden público y la seguridad pública interior.

RESUELVO:

1° En consecuencia, y según lo razonado precedentemente se niega el acceso a la información solicitada por el peticionario, don Felipe Plaza Paez, referida al 4.-Número de funcionarios que prestan servicios en las comunas de Providencia, Ñuñoa y La Reina personal por comunas y al 5.-Número de vehículos para acudir a los procedimientos, helicópteros (sólo los destinados a la zona indicada) y equipo en general, que presta servicio en las comunas de Providencia Ñuñoa y La Reina, determinándose el secreto o reserva de la información requerida conforme lo dispone el artículo 21 N° 2 y N° 3 de la Ley 20.285 sobre Acceso a Información Pública, que contemplan las causales de reserva o secreto cuando su publicidad o conocimiento afecte "los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico" y "la seguridad de la Nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden público o la seguridad pública" al afectar la seguridad personal de los funcionarios policiales, y la mantención del orden público y seguridad pública, todas materias de interés nacional, conforme lo razonado precedentemente.

2° Notifíquese, al requirente don Felipe Plaza Paez, por correo electrónico, de acuerdo a lo manifestado en su solicitud, en la dirección: clinicadeacceso@gmail.com.




Rosana Pajarito Henríquez
Prefecto Inspector (J)
Jefa de Jurídica

BCA.
Distribución:
- Felipe Plaza Paez
- Archivo.